



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., tres de febrero de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05360 31 03 002 2012 00684 03
Proceso.	Ordinario - Simulación
Demandante.	Juvenal Vélez Gil, Ramiro Vélez Gil y Joaquín Fernando Vélez Gil
Demandados.	Inversiones D. Vélez & Cía. S. en C. e Inversiones Laureles S.A. en Liquidación, Diego Jaime Vélez y herederos determinados de Nelly Gil de Vélez
Procedencia.	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí.
Decisión.	Confirma auto que aprobó liquidación de costas
Tema.	Parámetros para establecer el monto por concepto de costas y rangos de tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura para tal efecto.
Rdo. interno.	046-22
Interlocutorio No.	028-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 29 de marzo de 2022, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas efectuada dentro del proceso ordinario (simulación) de Juvenal, Ramiro y Joaquín Fernando Vélez Gil frente a las sociedades Inversiones D. Vélez & Cía. S. en C. e Inversiones Laureles S.A. en Liquidación, Diego Jaime Vélez, como heredero determinado de Nelly Gil de Vélez y herederos indeterminados de ésta

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Presentaron Juvenal Vélez Gil, Ramiro Vélez Gil y Joaquín Fernando Vélez Gil, demanda ordinaria en contra de las sociedades Inversiones D. Vélez & Cía. S. en C. e Inversiones Laureles S.A. en Liquidación, Diego Jaime Vélez, como heredero determinado de Nelly Gil de Vélez y herederos indeterminados de ésta, pretendiendo se declarara la simulación de las compraventas vertidas las escrituras públicas Nos. 332 del 21 de marzo de 1997 de la Notaría Segunda del Círculo de Itaguí y No. 433 de 21 de abril de 1997, de la misma Notaría.

2.- Oposición y trámite. Vinculada la parte resistente, sólo el codemandado Diego Jaime Vélez Gil propuso medios exceptivos, que luego, de agotarse las etapas procesales respectivas, fueron definidos de manera desfavorable en sentencia emitida el nueve de febrero de 2015, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUÍ, por lo que se accedió a la pretensión simulatoria invocada en el líbelo genitor, condenando en consecuencia a la parte resistente al pago de las costas causadas y fijando como agencias en derecho la suma de \$4.000.000, para ser incluida en aquélla (Pág. 536 a 555/02-2012-00684 C.1).

Dicha decisión fue apelada de manera oportuna por la parte desfavorecida con la decisión, siendo revocada por la SALA CIVIL-FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, en fallo emitido el 28 de noviembre de 2019, para en su lugar, declarar impróspera la acción de simulación promovida, condenando en costas de ambas instancias a la parte demandante a favor de la demandada, y fijando como agencias en derecho, la suma de \$1.000.000 (Pág. 70 a 90/02-2012-00684 C.8).

3.- El auto apelado. Luego, por providencia del 29 de marzo de 2022, el *a quo* aprobó la liquidación de costas efectuada en la misma fecha, y que ascendió a la suma de \$3.000.000, correspondiente al valor fijado como agencias en derecho (18AutoApruebaLiquidaciónCostasNiegaRecursos).

4.- La apelación. Oportunamente el vocero judicial de la parte

demandante interpuso los recursos de reposición, y en subsidio, de apelación, argumentando que los parámetros establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003, para la fijación del monto de las agencias era flexible, por lo que correspondía al funcionario judicial examinar los parámetros allí contemplados y atender a la gradualidad de que trata el artículo 3° de dicha regulación.

Planteó que los 10 años que había durado el proceso no le eran imputables de manera exclusiva a la parte actora, pues dentro de dicho lapso de tiempo debía considerarse la mora judicial, toda vez que el proceso había permanecido en esta Corporación alrededor de cuatro años y tres meses.

Finalmente, adujo que el demandado había incluido dentro de la demanda de pertenencia promovida el 15 de febrero de 2016, el inmueble La Gilesa, que estaba incluido dentro de la compraventa respecto de la cual se pretendía la simulación en este asunto, por lo que aún frente a dicho bien existía un litigio aún pendiente.

En consecuencia, solicitó la reducción al máximo del monto fijado por concepto de agencias en derecho.

5.- Decisión de la reposición. En proveído del 13 de mayo de 2022, el Juzgado de primera instancia repuso la decisión cuestionada, acogiendo los argumentos planteados por la parte demandada, para aumentar el valor de las agencias inicialmente fijado, a la suma de \$4.550.000, que correspondían al 7% de \$65.000.000, valor de la compraventa que se pretendía declarar simulada.

CONSIDERACIONES

1.- De la liquidación de costas. Las costas procesales son los gastos útiles o necesarios en los que debe incurrir la parte que resulta vencedora en un proceso ya sea para iniciar e impulsar el mismo, o para resistir el que es formulado en su contra, según sea el caso.

Ahora, el legislador enunció en el precepto 365 del Código General del

Proceso, los eventos en los cuales hay lugar a imponer condena en costas y a cargo de quien, contemplando en el numeral 1° que se impondrá a la parte vencida en el proceso y a quien le resulte desfavorable el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya formulado.

Dentro de dicha liquidación, conforme lo establecido en el numeral 3° del artículo 366 *ibídem*, se incluyen, entre otros, el valor de las agencias que sean señaladas por el funcionario judicial cognoscente, en cualquiera de las instancias, y debe ser realizada de manera concentrada por el juzgado que haya adelantado el trámite del proceso en primera o única instancia, conforme a las reglas que se establecen en la citada norma.

2.- De las agencias en derecho. Igualmente, el precepto 366 del Código General del Proceso, en su numeral 4°, señala que para la fijación del monto correspondiente a las agencias en derecho, el juez debe atender las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003¹ (modificado por el Acuerdo No. 2222 del 10 de diciembre de 2003 en cuanto a los procesos ordinarios, abreviados y verbales y adicionado por el Acuerdo 9943 de 2013, en cuanto a la renuncia o desistimiento de pretensiones), señalando que en los eventos que éstas establezcan solamente un mínimo, o éste y un máximo se debe tener en cuenta, además, la naturaleza, la calidad, la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales, sin que en ningún evento pudiera fijarse una suma superior al máximo.

Sobre este mismo aspecto, el artículo 3° del citado Acuerdo 1887, establece:

“ART. 3°—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las

¹ Aplicable al caso concreto, por tratarse de un asunto iniciado antes de la vigencia de ACUERDO No. PSAA16-10554, conforme lo contemplado en el artículo 7 de esta disposición.

tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”

Dicho Acuerdo reguló para la fijación de las agencias en derecho en los procesos ordinario, en primera instancia, hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia; y para lo eventos en que además se reconociera o negaran obligaciones de hacer, un incremento hasta de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

Ahora, para quien pretenda cuestionar el monto señalado por concepto de agencias en derecho, deberá formular recurso de reposición y/o apelación en contra del auto que pruebe la liquidación de costas, al tenor de lo establecido en el canon 366, numeral 5° del Código General del Proceso.

3.- Caso concreto. Manifestó la parte demandante su desacuerdo frente al monto de las agencias fijadas por el a quo, arguyendo que no se había considerado para tal efecto, que el tiempo de duración del proceso se debía a múltiples factores, entre ellos, a la mora judicial en la que había incurrido esta Corporación por cuanto el trámite de la apelación formulada en contra de la sentencia había tardado alrededor de cuatro (4) años y tres (3) meses, debiendo en consecuencia, reducirse el porcentaje estimado por el juez de primer grado, atendiendo a la gradualidad que se contempla como criterio en la regulación sobre la materia.

Aunado a lo anterior, planteó que aún se encontraba en discusión un bien que había sido objeto de la compraventa que se pretendía fuera declarada simulada en este proceso.

En cuanto al primer argumento, debe indicarse que, tal como se indicó antes, la norma que regula el parámetro para la fijación de agencias en primera instancia para los procesos ordinario, estableció un techo, pero no un piso, pudiendo el funcionario judicial moverse en un rango que no supere el 20% que se estableció como tope máximo, atendiendo para tal efecto los aspectos propios del proceso que le permitan escoger el porcentaje a aplicar sobre las

pretensiones.

Sobre este aspecto, expuso la providencia que se repara verticalmente que, atendiendo a los criterios de utilidad de la actuación adelantada por la parte demandada, al estimar aquella como diligencia, el porcentaje aplicable al caso debía ascender al 7%, debiendo recaer sobre el valor de la compraventa que pretendía declararse simulada, pero, además, en razón de la naturaleza del asunto y la duración del proceso.

Ahora, si bien es cierto, como lo aduce el vocero judicial de la parte recurrente, el tiempo que tardó el trámite del presente asunto no le resulta imputable de manera exclusiva a la parte demandante, debiendo incluso, precisarse que tampoco a la demandada, refiriéndose del lapso de tiempo que estuvo el proceso a la espera de una decisión frente a la alzada promovida en contra de la sentencia, también lo es, que, como viene de señalarse tal aspecto fue considerado por el a quo, para determinar el porcentaje aplicable en este caso para fijar las agencias, y es precisamente por esta razón que no aplicó el tope máximo, el cual asciende al 20%, sino que optó por un 7%, que corresponde a menos de la mitad del límite que estableció la norma.

Al respecto, debe precisarse que el trámite de la primera instancia tardó tres (3) años aproximadamente, y que, solo considerando el término legal conferido para tal efecto, en razón del tiempo que permaneció a la espera de la decisión y que aduce el recurrente no le es atribuible, tendría que haber tenido una duración de un año más, que sumarían cuatro (4) años, a los cuales además tendría que adicionarse el tiempo que tardó el trámite posterior a la sentencia de segunda instancia, el cual ascendió a dos (2) años y dos (2) meses, aproximadamente, si se tiene en cuenta que dicha providencia fue dictada el 28 de noviembre de 2019 y el auto que dispuso cumplir lo resuelto por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con relación al recurso de casación fue dictado el 31 de enero de 2022; para un total de duración del proceso de seis (años) y dos (2) meses.

Por tanto, no encuentra esta Corporación que el porcentaje aplicado sea desproporcionado si se examinan en conjunto los criterios que se le otorgan al

juez para su fijación, como lo son la naturaleza del proceso, la duración del mismo y la gestión útil del abogado, que como se expuso con antelación, fueron considerados para tal efecto.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada y se condenará en costas al recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUÍ, el 29 de marzo 2022, modificado por auto del 13 de mayo de 2022 dentro del proceso ORDINARIO instaurado por Juvenal Vélez Gil, Ramiro Vélez Gil y Joaquín Fernando Vélez Gil, demanda ordinaria frente a las sociedades Inversiones D. Vélez & Cía. S. en C. e Inversiones Laureles S.A. en Liquidación, Diego Jaime Vélez, como heredero determinado de Nelly Gil de Vélez y herederos indeterminados de ésta.

Se condena en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M.L. (\$1.160.000).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado